**JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.**

**EXPEDIENTE**: TEEA-JDC-007/2021 y acumulado.

**PROMOVENTE**: SALMA LUÉVANO LUNA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL COLECTIVO “JUNTOS POR EL CAMINO DE LA DIVERSIDAD” y otro.

**AUTORIDAD RESPONSABLE**: CG DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES.

**MAGISTRADA PONENTE:** CLAUDIA ELOISA DÍAZ DE LEÓN GONZÁLEZ.

**SECRETARIO DE ESTUDIO:** NÉSTOR ENRIQUE RIVERA LÓPEZ.

**COLABORADORES:** IGNACIO ALEJANDRO MARTÍNEZ SOTO, VANESSA SOTO MACÍAS.

Aguascalientes, Aguascalientes, a once de febrero de dos mil veintiuno.

**Sentencia definitiva** en la que: **a)** **se ordena** al IEE a reglamentar acciones afirmativas para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 y; **b) se da vista al Congreso del Estado,** para que implemente acciones afirmativas respecto a la inclusión efectiva de personas en situación de vulnerabilidad, al ejercicio del poder público para posteriores procesos electorales.

**GLOSARIO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actores o promoventes:** | Salma Luévano Luna, en su carácter de presidenta del colectivo “Juntos por el camino de la diversidad” y; Juan Carlos Soto Hernández, quien se ostenta como simpatizante de MORENA.  |
| **IEE:** | Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. |
| **CG:** | Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. |
| **Tribunal:**  | Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes.  |
| **CG-A-36/2020** | Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal de Aguascalientes mediante el cual se aprueban las reglas para garantizar la paridad de género en el proceso electoral concurrente ordinario 2020-2021.  |
| **Sala Superior:** | Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. |
| **SCJN:** | Suprema Corte de Justicia de la Nación. |
| **Código Electoral:**  | Código Electoral del Estado de Aguascalientes.  |
| **Reglamento de Elecciones:** | Reglamento de Elecciones del INE. |
| **JDC:** | Juicio para lo protección de los derechos político-electorales del ciudadano. |
| **Constitución Federal:** | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
| **PEL 2020-2021:** | Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. |
| **LGBTIQ+:** | Comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual, Intersexual y más. |
| **Grupos en situación de vulnerabilidad:** | Grupos en situación de vulnerabilidad: personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas, comunidad LGBTIQ+. |

1. **ANTECEDENTES**. Las fechas corresponden a la anualidad del dos mil veintiuno, salvo precisión en contrario.
	1. **Inicio del Proceso Electoral.** El día tres de noviembre del año dos mil veinte, en sesión extraordinaria del CG se realizó la declaratoria del inicio del Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2020-2021 en el estado de Aguascalientes, para la renovación del Congreso del Estado y de los once Ayuntamientos que conforman la entidad.
	2. **Sentencia Tribunal Electoral del Estado en relación con medidas afirmativas en el proceso de designación de Consejeros Distritales y Municipales**. El tres de noviembre del dos mil veinte se dictó la resolución del expediente TEEA-JDC-018/2020, dentro del juicio interpuesto en contra de la Convocatoria para integrar los Consejos Distritales y Municipales.

En la resolución se ordenó: establecer una medida afirmativa en favor de las personas en situación de vulnerabilidad; la implementación de casillero “no binario”; elaborar un manual de buenas prácticas para la atención a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad; elaborar una agenda inclusiva; entre otras disposiciones específicas relativas a la convocatoria impugnada.

* 1. **Acuerdo del Consejo General del IEE.** El seis de noviembre del dos mil veinte, el CG aprobó el acuerdo **CG-A-36/2020**, por el que se aprobaron las “*Reglas para Garantizar la Paridad de Género en el Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2020-2021.”*

El día diecisiete de noviembre de la misma anualidad, se dictó sentencia definitiva dentro del expediente TEEA-RAP-007/2020, en la que **confirmó** la legalidad del acuerdo **CG-A-36/2020 en lo que fue materia de impugnación.**

* 1. **Sentencia Sala Regional Monterrey dentro del Expediente SM-JDC-349/2020.** El veinte de noviembre del dos mil veinte, la Sala Regional Monterrey **confirmó** el fallo TEEA-JDC-018/2020 del Tribunal Electoral de Aguascalientes por el cual revocó la respuesta del CG del IEE a la consulta planteada por una ciudadana y la convocatoria para integrar los Consejos Distritales y Municipales para el proceso electoral local 2020-2021, por considerar que debió incluirse una medida afirmativa en favor de grupos vulnerables.
	2. **Sentencia de Sala Superior en el expediente SUP-REC-277/2020.** Por su parte, el veintinueve de diciembre del dos mil veinte, Sala Superior **confirmó** la determinación de Sala Monterrey, al considerar que es válido ordenar la implementación de cuotas para [grupos vulnerables](https://www.facebook.com/hashtag/gruposvulnerables?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXBmzqOIk3rwKeIvWvdwFllYKF5vEMu7NqrJN0zIqSfaeZgBb4kMcoIgM9BDg2-rJa5Ctdeyv3Oe5-yg7-OWYSpUaA14yfaacbBYXb0YRMQiRwai9G6SfyhwXVa3IVccnEPMo5XBgvw1a4LnfiDKzfO&__tn__=*NK-R), que incluyan a personas [no binarias](https://www.facebook.com/hashtag/nobinarias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXBmzqOIk3rwKeIvWvdwFllYKF5vEMu7NqrJN0zIqSfaeZgBb4kMcoIgM9BDg2-rJa5Ctdeyv3Oe5-yg7-OWYSpUaA14yfaacbBYXb0YRMQiRwai9G6SfyhwXVa3IVccnEPMo5XBgvw1a4LnfiDKzfO&__tn__=*NK-R) en la integración de consejos distritales y municipales en una autoridad electoral local.
	3. **Acuerdo INE/CG572/2020.** En fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte el INE aprobó el *“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CRITERIOS APLICABLES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”*.
	4. **Sentencia emitida por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-121/2020.** En fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, la Sala Superior revocó el acuerdo referido en el punto anterior y ordenó al INE que estableciera medidas afirmativas tendentes a garantizar las condiciones de igualdad para la participación política de las personas con discapacidad, así como de otros grupos en situación de vulnerabilidad, de igual manera, dio vista al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que, en ejercicio de sus atribuciones, lleve a cabo las adecuaciones conducentes en relación con las medidas afirmativas tendentes a garantizar el acceso efectivo de las personas en situación de vulnerabilidad, al ejercicio del poder público.
	5. **Acuerdo del INE en cumplimiento a la Sentencia de Sala Superior.** El día quince de enero el INE aprobó el *“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-121/2020 Y ACUMULADOS, SE MODIFICAN LOS CRITERIOS APLICABLES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, APROBADOS MEDIANTE ACUERDO INE/CG572/2020”*.
	6. **Presentación de juicio ciudadano local.** El veintidós de enero la C. Salma Luevano Luna promovió juicio ciudadano en contra de la omisión del IEE de implementar acciones afirmativas en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad como la comunidad LGBTIQ+ y las personas con discapacidad para acceder a candidaturas para la renovación del Congreso y los once Ayuntamientos que conforman el Estado de Aguascalientes
	7. **Recepción del expediente en el TEEA.** El veintidós de enero de dos mil veintiuno, la responsable remitió a este Tribunal el medio de impugnación, el informe circunstanciado y el expediente debidamente integrado.
	8. **Turno**. Por acuerdo de presidencia de veintitrés de enero, se le asignó el número de expediente TEEA-JDC-007/2021 y fue turnado a la ponencia I, a cargo de la Magistrada Claudia Eloisa Díaz de León González.
	9. **Acuerdo Plenario de Reencauzamiento y Turno.** El día dos de febrero se recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal un Acuerdo Plenario de Reencauzamiento dictado por la Sala Regional Monterrey, por el que se *reencauza la demanda*, en virtud de que el Promovente Juan Carlos Soto Hernández, interpuso Juicio Ciudadano por la vía *per saltum¸* en contra de la supuesta omisión del CG de implementar acciones afirmativas en beneficio de la comunidad LGBTIQ+ y de personas con discapacidad.

Sin embargo, la Sala Monterrey determinó que no se actualizó alguna excepción para saltar la instancia local por lo que fue remitido el expediente para que sea este Tribunal quien conozca del asunto.

El día tres de febrero, se le asignó el número de expediente TEEA-JDC-010/2021 y fue turnado a la ponencia I, a cargo de la Magistrada Claudia Eloisa Díaz de León González.

* 1. **Radicación y admisión.** La magistrada instructora radicó el expediente, y en su oportunidad, admitió la demanda.
	2. **Cierre de instrucción**. Una vez substanciado en todas sus etapas el expediente, la Magistrada Ponente, declaró el cierre de instrucción, y ordenó formular el proyecto de resolución.
1. **COMPETENCIA**. De conformidad con lo previsto en los artículos 1, 2, 9 y 10, fracción, IV, 12 y 13 de los Lineamientos y 9 del Reglamento Interior, este Tribunal es competente para conocer y resolver los JDC promovido por la representante del colectivo “Juntos por el camino de la diversidad”, y por el C. Juan Carlos Soto Hernández, en contra de la omisión del CG de emitir lineamientos o implementar medidas afirmativas en favor de personas en situación de vulnerabilidad, en cuanto a la postulación de candidaturas para la integración del Congreso Local y los Ayuntamientos.
2. **ACUMULACIÓN.** El Pleno de este Tribunal, observa que, en la especie, es procedente acumular el juicio TEEA-JDC-010/2021, al diverso TEEA-JDC-007/2021, debido a que éste fue el primero que se registró, por lo que debe agregarse una copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los autos del expediente acumulado, en atención a lo que disponen los artículos 257 del Código Electoral y 129 del Reglamento.

Lo anterior, debido a que se trata de dos JDC, en los que medularmente impugna la supuesta omisión del CG de implementar acciones afirmativas en favor de grupos en situación de vulnerabilidad para el acceso a candidaturas y cargos de elección popular.

Al respecto, debe señalarse que los efectos de la acumulación son meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los diversos juicios, sino que, las finalidades que se persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias contradictorias[[1]](#footnote-1).

1. **PROCEDENCIA**. El JDC cumple con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 302 del Código Electoral.

**a) Forma.** La demanda fue presentada por escrito, se identificó el acto impugnado, se expusieron los hechos y agravios en los que se basa el medio de impugnación, los preceptos presuntamente violados, así como el nombre y firma autógrafa de las partes promoventes.

**b) Oportunidad.** El juicio se interpone en tiempo y forma, pues la modalidad que se pretende combatir, al tratarse de una presunta omisión de la autoridad responsable, la cual no tiene una temporalidad que prescriba el derecho de acción, por lo que las faltas de las que se dueleN son consideradas de tracto sucesivo impugnables en cualquier momento, por tal motivo se actualizan día con día.

**c) Legitimación y Personería.** Los JDC fueron promovidos por Salma Luévano Luna, en representación del colectivo “Juntos por el camino de la diversidad”, personalidad que ha sido reconocida por la autoridad responsable; y por C. Juan Carlos Soto Hernández, por su propio derecho y quien se ostenta como simpatizante del partido MORENA y aspirante a diputado local para el PEL 2020-2021.

**d) Interés Legítimo.** Para este Tribunal, *contrario a lo que refiere la autoridad responsable*, quienes promueven tienen interés legítimo por las siguientes consideraciones:

En el caso concreto, se trata de tutelar el derecho político de conformar autoridades electorales y, en el acto concreto, se duelen medularmente de la situación de vulnerabilidad que han vivido y continúan soportando las personas que han sido discriminados históricamente, por lo que se pretende revertir la discriminación y facilitar el acceso efectivo al ejercicio de los poderes públicos.

En ese sentido, se advierte que las partes promoventes cuenta con un interés legítimo para promover un medio de impugnación que busca no solo visibilizar a los grupos en situación de vulnerabilidad, sino que además pretende lograr hacer efectivo el derecho de estos grupos para integrar tanto el Congreso Local como los Ayuntamientos que se han de elegir en el presente PEL 2020-2021.

Se sostiene lo anterior con fundamento en la tesis XI.1o.A.T.50 K, de rubro: “**INTERESES DIFUSOS O COLECTIVOS. SU TUTELA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO**”[[2]](#footnote-2), el Poder Judicial de la Federación reconoce los derechos colectivos y señala que los intereses difusos se relacionan con aquellas situaciones jurídicas no referidas a un individuo, sino que pertenecen a una pluralidad de sujetos que están vinculados por circunstancias de hecho, en una situación específica, que los hace unificarse para acceder a un derecho que les es común, por tanto, todos los miembros son titulares de un derecho.

Bajo ese entendimiento, los promoventes acuden, una, no solo como representante, sino como parte de un grupo en situación de vulnerabilidad, y aspirante a candidata a diputada por un partido político, y el otro como miembro de un grupo en situación de vulnerabilidad y además como aspirante a candidato a diputado por un partido político al respecto, lo que en esencia es una situación de riesgo, se trata de la posibilidad latente de que ocurran acontecimientos no previsibles, con consecuencias significativamente negativas sobre determinadas personas o comunidades, lo que potencia la peligrosidad y que derivan en actos discriminatorios.

Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)[[3]](#footnote-3), ha dicho que la vulnerabilidad o estado de mayor riesgo que sufren ciertos grupos, se genera por la exclusión de que son objeto, dadas sus condiciones o características particulares, por virtud de las cuales, se les ha impedido satisfacer sus necesidades básicas o disfrutar sus derechos, lo que constituye verdaderos actos de discriminación.

En este tenor, la Sala Superior[[4]](#footnote-4) determinó que cuando se trate de impugnaciones relacionadas con la tutela de principios y derechos constitucionales establecidos a favor de un grupo histórica y estructuralmente discriminados; cualquiera de sus integrantes puede acudir a juicio, al tratarse del mecanismo de defensa efectivo para su protección.

Es decir, que, en estos casos, se actualiza un interés legítimo para todos y cada uno de los integrantes de los grupos en situación de vulnerabilidad, pues al permitir que una persona o grupo combata un acto constitutivo de una afectación a los derechos de ese grupo, hace posible la corrección jurisdiccional de determinaciones cuya existencia profundiza la marginación e impide el ejercicio de los derechos políticos en condiciones de igualdad.

Así, de los criterios jurisprudenciales ya citados, se desprende que todos los miembros de un grupo, cuentan con interés legítimo para promover el medio de defensa en el que se haga valer un interés común y la decisión del conflicto se traducirá en un beneficio para todos y no sólo para quienes impugnaron el acto.

Por lo anterior, la legitimación se surte en cuanto que la promovente hace valer la presunta violación al principio de igualdad y no discriminación de un grupo poblacional colocado histórica, social y culturalmente en situación de vulnerabilidad y que se encuentra subrepresentado, al considerar que el CG omitió incorporar en el acuerdo, acciones afirmativas tendentes a garantizar que las personas con discapacidad accedan, en condiciones de igualdad, al ejercicio del poder públicos en cargos de representación política

Por tanto, la causal de improcedencia que busca invocar la autoridad responsable queda desvirtuada al tenerse por acreditado el interés legítimo de la promovente.

**e) Definitividad.** Se colma tal requisito, ya que, en el Código Electoral, no se prevé medio de impugnación diverso por el que previamente se pueda combatir el acto que se impugna.

1. **TERCEROS INTERESADOS**. De las constancias que obran en autos, no se advierte comparecencia de tercero interesado alguno.
2. **AGRAVIOS.** En cuanto a los agravios, él y la ciudadana que promueven, señalan agravios idénticos, por lo que, a fin de señalar de manera general los argumentos que hacen valer, se hace una síntesis de los mismos, sin que ello constituya una transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate derivados de la demanda o del escrito de expresión de agravios, se estudian y se les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis.

Entonces, es importante retomar lo que ha determinado la Sala de la SCJN en cuanto a la transcripción de los mismos, jurisprudencia número 2ª./J.58/2010, de rubro: **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN[[5]](#footnote-5).**

Cabe señalar que de conformidad con la jurisprudencia 3/2000, de rubro: **“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR” [[6]](#footnote-6)**  así como la diversa de rubro: **“DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA DESENTRAÑAR LA CAUSA DE PEDIR”[[7]](#footnote-7),**todos los razonamientos y expresiones que aparezcan en la demanda, constituyen un principio de agravio, con independencia de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, por lo que basta que la actora exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa la resolución impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en ello se pueda advertir de manera plena lo realmente planteado.

De igual manera, debe subrayarse que, al tratarse de un JDC, debe suplirse la deficiencia de la queja en la exposición de los agravios, siempre y cuando ellos puedan deducirse claramente de los hechos expuestos.

**SÍNTESIS DE LOS AGRAVIOS.**

Las partes que promueven, centran sus agravios en la omisión por parte del CG de no emitir acciones afirmativas en beneficio de los grupos en situación de vulnerabilidad, ya que fue omiso en la producción de lineamientos que impongan tales medidas en el proceso de postulación de candidaturas de los partidos políticos en favor de los grupos que representan para el efectivo ejercicio de los derechos político-electorales.

También señalan, que tal omisión transgrede los principios de no discriminación, igualdad, y derecho de ser votado, así como el principio pro persona; esto, porque la autoridad responsable, a consideración de los promoventes, está obligada a favorecer a todas las personas con la protección más amplia, apartando obstáculos que impidan el libre ejercicio de derechos político-electorales y a garantizando que las personas en situación de vulnerabilidad, en condiciones de igualdad, accedan al ejercicio del poder público.

Así mismo, señalan que la autoridad ha dejado de ejercer la facultad reglamentaria, cuando está obligado a prever medidas o acciones que materialicen los principios de libertad y no discriminación, por lo que, al ser omiso, no ha generado condiciones para que las personas en situación de vulnerabilidad participen en condiciones reales de igualdad.

Se duelen de una violación sistemática, pues la autoridad responsable por voluntad propia, no ha emitido acciones en beneficio de los grupos en situación de vulnerabilidad salvo las que han sido ordenadas a través de la autoridad jurisdiccional, en otras resoluciones.

Señalan los promoventes que *“en la historia de la conformación del Congreso del Estado, y de Ayuntamientos, no se ha elegido a persona alguna de la comunidad LGBTIQ+*  *(al menos abiertamente), ni personas con discapacidad”.*

Además, el promovente, se duele de la ausencia de cuotas específicas para los grupos en situación de vulnerabilidad, que, de no atenderse, seguirán “*sin representación por los próximos 3 años”*

Aunado a lo anterior, las promoventes refieren que el CG en su oportunidad, al emitir el CG-A-36/2020, emitió únicamente acciones afirmativas en favor de las mujeres, omitiendo a otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Ahora bien, por razón de método, el análisis de los conceptos de agravios se hará en su conjunto, sin que tal situación ocasione perjuicio alguno a los promoventes, con sustento en el criterio sostenido por la Sala Superior en la jurisprudencia 4/2000, cuyo rubro es: **"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"[[8]](#footnote-8)**, porque la forma de analizarlos no es lo que puede originar una lesión, sino que lo trascendental, es que todos sean integralmente estudiados[[9]](#footnote-9).

1. **FIJACIÓN DE LA LITIS.** Este Tribunal, considera que la cuestión a resolver*, tal como lo señalan las partes promoventes,* es determinar si existe una omisión por parte de la autoridad responsable en cuanto a la emisión de lineamientos o reglas relativas a garantizar condiciones de igualdad en el acceso a cargos públicos mediante acciones afirmativas en favor de grupos en situación de vulnerabilidad, y de ser el caso, si estas deben ser establecidas en el PEL 2020-2021 en curso y/o subsecuentes.
2. **METODOLOGÍA**. En primer lugar, a la luz de los preceptos constitucionales y legales, y atendiendo al *Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género,* se analizará a efecto de determinar si de la normatividad nacional y convencional, el CG tiene la obligación de velar por los derechos de los grupos vulnerables, en lo que respecta a la esfera de derechos político electorales para hacer posible una contienda igualitaria y procurarles el acceso a los cargos públicos.

De tal análisis se concluirá si, de tener esa obligación, a fin de propiciar su visibilización e inclusión, la autoridad administrativa electoral tiene, dentro de sus atribuciones, la facultad de instaurar una serie de acciones afirmativas para ese propósito.

De resultar procedente lo anterior, se abordará la pretensión de las partes actoras en cuanto a la posibilidad de implementación de las mismas, a manera de cuotas en candidaturas, y/o el establecimiento de otro tipo de medidas afirmativas, para, en atención a la etapa actual del proceso electoral, estudiar su viabilidad para este proceso 2020-2021, o los subsecuentes. Lo anterior, por sus imbricaciones con otro tipo de principios que deben garantizarse, y que, de resultar factible, se analizará en qué etapa y con qué efecto pueden y deben implementarse.

1. **ANTECEDENTES RELEVANTES AL CASO.**
2. **Cadena impugnativa relativa a la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad en la conformación de autoridades electorales.**

**Juicio ciudadano TEEA-JDC-018/2020.** La promovente, en representación de la Asociación LGBTIQ+ “Juntos por el camino de la Diversidad”, por medio de una consulta y una solicitud, acudió al IEE para que se implementara una acción afirmativa en favor de la comunidad que representa, con la finalidad de acceder de manera igualitaria y sin discriminación, en el proceso de conformación de los Consejos Distritales y Municipales de cara al PEL 2020-2021.

El CG, en su respuesta a la consulta, les reconoció su calidad de grupo discriminado, y la consecuente obligación constitucional, legal y convencional de implementar mecanismos de nivelación que tienen como autoridad, sin embargo, determinó que, de sus pretensiones, no es posible agregar un casillero no binario, ni establecer cuotas, señalando que, de hacerlo, se rompería con la paridad, por lo que limitó su actuación a adoptar un criterio orientador, respetando la identidad de género.

Inconformes con la respuesta de la autoridad, se presentó un juicio ciudadano en contra de la negativa del CG de implementar acciones afirmativas en beneficio de la comunidad LGBTIQ+ para acceder a cargos de consejerías electorales distritales y municipales para el actual proceso electoral en el Estado de Aguascalientes.

La promovente consideró, que los grupos vulnerables se encuentran invisibilizados en todos los campos del derecho, incluyendo el político electoral y que, por lo tanto, es necesario que el IEE implemente acciones afirmativas que posibiliten que las personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+ accedan a la conformación de autoridades electorales.

Así, este Tribunal determinó revocar la *“Convocatoria dirigida a la ciudadanía residente en el Estado de Aguascalientes, interesada en participar en el procedimiento de selección y designación de las personas, propietarias y suplentes que integrarán los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales para el PEL 2020-2021”*; se ordenó al CG, entre otras cuestiones, la implementación de una medida afirmativa no solo a favor de la comunidad LGBTIQ+, sino que se amplió en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, para materializar su acceso efectivo en la conformación de las autoridades electorales, consistente en una cuota específica del 10% del total de nombramientos (como miembros de Consejo Distrital y Municipal -consejero propietario o secretario técnico-, y como suplentes); se instruyó la creación de casilleros “no binarios”; se ordenó la creación de una agenda inclusiva.

Además, se conminó al CG para que, en lo subsecuente, en el rubro de educación cívica, emitiera sus determinaciones y realizara sus actividades, atendiendo a los criterios de igualdad previstos en el artículo 1° Constitucional, en cumplimiento a su obligación de coadyuvar en la erradicación de la discriminación o segregación de los grupos en situación de vulnerabilidad y lograr el acceso efectivo a sus derechos político-electorales.

**Sentencia SM-JDC-349/2020.** La Sala Regional Monterrey confirmó la sentencia TEEA-JDC-018/2020 emitida por este Tribunal[[10]](#footnote-10) señalando que la determinación de implementar una cuota de esa naturaleza, es congruente con el deber constitucional y convencional que tienen todas las autoridades, incluidas las electorales, de adoptar medidas necesarias para garantizar la igualdad sustantiva y estructural, así como la no discriminación de las personas que conformen algún grupo de los que históricamente han sido vulnerados.

**Sentencia SUP-REC-277/2020.** La cadena impugnativa prosiguió hasta la Sala Superior, misma que confirmó lo dispuesto por la Sala Regional Monterrey, al considerar acertado que se haga prevalecer el derecho humano a la igualdad de oportunidades de las personas que son pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ las que tienen alguna discapacidad, las mayores de sesenta años y a los indígenas, para conformar autoridades electorales, mediante la implementación de acciones afirmativas.

Así mismo, se manifestó sobre la relación y posibilidad de convivencia y coexistencia de estas acciones afirmativas con el principio de paridad, considerando que, si bien existen diferencias de grado y temporalidad, tanto unas, como la otras, tienen como fin último el logro de la igualdad. De ahí, que estas medidas sean compatibles y puedan subsistir en cualquier escenario de integración de cuerpos colegiados, para el que se pretenda visibilizar a grupos vulnerables.

1. **Cadena Impugnativa Derivada de los Lineamientos para el Registro de Candidaturas del Proceso Electoral Federal 2020-2021**

**Acuerdo INE/CG572/2020.** A nivel nacional, el INE aprobó el Acuerdo INE/CG572/2020 por el cual, se emitieron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 2020-2021.

El INE, determinó que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para los grupos históricamente vulnerados y, además, cumplen con el propósito de garantizar la igualdad en oportunidades a efecto de todas las personas sin distinción gocen de los mismos derechos.

Sin embargo, el diseño de los lineamientos controvertidos, no incluyó a diversos grupos vulnerables dentro de sus criterios.

**Sentencia SUP-RAP-121/2020.** En desacuerdo con el acuerdo anterior, diversos partidos políticos y un ciudadano interpusieron recursos ante la Sala Superior refiriendo agravios específicos en cuanto a candidaturas en distritos indígenas, así como respecto ala omisión del INE de establecer acciones afirmativas dirigidas a la inclusión política de personas que pertenecen a grupos vulnerables vía postulación de candidaturas.

En esa inteligencia, Sala Superior derivado del marco constitucional y convencional, analizó las obligaciones atinentes a todas las autoridades y partidos políticos de procurar el ideal de igualdad, y la necesidad de la inclusión de estos grupos en la vida política, e hizo el estudio de las vías de consolidación de estos propósitos, haciendo un estudio contextual de la composición de la representación popular en los poderes públicos.

En la resolución, se determinó fundada la omisión alegada por los ciudadanos promoventes, por lo que ordenó al INE: modificara el acuerdo controvertido; implementara acciones afirmativas para personas con discapacidad así como de otros grupos en situación de vulnerabilidad; determinara cuáles grupos ameritan representación legislativa y diseñara acciones afirmativas también, dio vista al Congreso de la Unión, para que legislara respecto de la inclusión de acciones afirmativas para los grupos sociales vulnerables.

Así, la Sala Superior concluyó que el INE, tiene atribuciones constitucionales, convencionales y legales para implementar acciones afirmativas, y que éstas, fortalecen el derecho a la igualdad de los grupos en situación de vulnerabilidad, otorgando la posibilidad de una autentica representación en el Congreso.

En ese entendimiento, las acciones afirmativas ordenadas al INE, generan certeza y asegura la inclusión de todas las personas, garantizando una real representatividad de todos los grupos de la sociedad.

**Acuerdo INE/CG18/2021.** En acatamiento a la sentencia anterior, con el objeto de optimizar el derecho al sufragio pasivo de grupos de población en situación de vulnerabilidad como grupos que sufren de una exclusión sistemática y de una invisibilización social, modificó los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios, aprobando cuotas para *Personas Indígenas, Personas con Discapacidad, Personas Afroamericanas y Personas de la Diversidad Sexual.*

Se estimó, que debe ser exigible a los partidos políticos nacionales y coaliciones un piso mínimo que permita expandir los derechos de las 7.8 millones de personas que se encuentren dentro de este grupo a partir de una masa crítica, postulando fórmulas de candidaturas integradas por personas con discapacidad en **6 (seis) de los 300 Distritos que conforman el país**, con lo cual, se alcanzaría una representatividad en las candidaturas de la población que integra este grupo.

Para los efectos del cumplimiento del párrafo anterior, en el caso de coaliciones parciales o flexibles, las personas con discapacidad postuladas por éstas se sumarán a las que se postulen en lo individual cada uno de los partidos políticos que las integren, independientemente del partido político de origen de la persona.

En lo referente al principio de Representación Proporcional, a efecto de incrementar la participación de las personas con discapacidad y, por ende, alcanzar progresivamente una mayor integración de las personas pertenecientes a este grupo, dentro de quienes resulten electas, este Consejo General estima necesario también exigir a los partidos políticos la postulación de por lo menos **2 (dos) fórmulas** integradas por personas con discapacidad. Dichas fórmulas podrán postularse en cualquiera de las cinco circunscripciones, las cuales deberán ubicarse en los primeros diez lugares de cada lista.

1. **ESTUDIO DE FONDO**
2. **MARCO NORMATIVO**

**Constitución Política.**

El artículo 1°, párrafo segundo de la Constitución Federal, instituye que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Además, contiene una serie de disposiciones que abrazan a todo el cuerpo de derechos fundamentales reconocidos en favor de las personas, determinando que todas ellas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, y que su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones previstos por la propia norma suprema.

Establece, que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos según los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, debiendo prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Así mismo, prohíbe toda discriminación motivada por el origen étnico, el género o las discapacidades y esté dirigida a menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas.

En cuanto al Principio de Igualdad consagrado en el artículo 4 de la Constitución Federal, la Corte ha señalado *que el legislador* no postula la paridad entre todos los individuos, lo que no implica necesariamente una igualdad material o económica, sino que la finalidad de la igualdad exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa[[11]](#footnote-11).

Bajo ese entendimiento, el principio de igualdad tiene un carácter complejo y encuentra su fundamento en diversos preceptos Constitucionales, a saber, los artículos 1°, primer y último párrafos, 2°, apartado B, 4°., 13, 14, 17, 31, fracción IV, y 123, apartado A, fracción VII; normas relativas a la igualdad, que imponen obligaciones específicas a los poderes públicos.

En la misma tesitura, el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal prevé que la ciudadanía podrá ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades exigidas por la ley.

Así, el parámetro de regularidad constitucional del derecho a la igualdad y a la no discriminación, reconoce que esta última ocurre no sólo cuando las normas, las políticas, las prácticas y los programas invocan explícitamente un factor prohibido de discriminación –categoría sospechosa–, sino también cuando éstas son aparentemente neutras, pero el resultado de su contenido o aplicación genera un impacto desproporcionado en personas o grupos en situación de desventaja histórica, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable.

En cuanto a los Partidos políticos, el artículo 41, Base I, de la misma Carta Magna, dispone que estos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.

**Marco Internacional**

El Artículo 6° de la Carta Democrática Interamericana, indica que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es además de un derecho y una responsabilidad, una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 23, establece que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos y, de votar y ser votados en elecciones periódicas.

Por otro lado, de conformidad con el artículo 1° de Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, el término *"discapacidad"* significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

También menciona que; *"discriminación contra las personas con discapacidad"* significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, que tenga, ya sea como efecto o propósito, impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversos asuntos[[12]](#footnote-12) refiere que el Estado tiene el deber de respetar y garantizar “sin discriminación” los derechos contenidos en la Convención Americana; considera que los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas.

Esto, implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer respecto de actuaciones y prácticas discriminatorias de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan.

Además, señala que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los compromisos específicos cuyo cumplimiento, por parte del Estado es necesario para satisfacer el respeto y garantía de los derechos humanos.

Reconociendo también que todos la ciudadanía tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país, concluyendo que el Estado se encuentra obligado a garantizar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, marginalización y discriminación, las condiciones jurídicas y administrativas que les aseguren el ejercicio de este derecho, en atención al principio de igualdad ante la ley.

**Marco Nacional.**

Por su parte, el Pleno de la SCJN, al resolver la contradicción de tesis relacionada al expediente 293/2012, determinó que los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, tienen la misma jerarquía normativa y que los criterios sostenidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el estado mexicano.

En ese orden, la Primera Sala de la Corte Suprema, sostiene que el derecho a la igualdad sustantiva, o, de hecho, radica en alcanzar una igualdad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva a que en algunos casos sea necesario remover los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos.

Por otro lado, en la acción de inconstitucionalidad 78/2017 y su acumulada 79/2017, se considera que las acciones afirmativas aluden a todas aquellas medidas, políticas o decisiones públicas a través de las cuales se establece un trato ventajoso, y en cuanto tal formalmente desigual, que favorece a determinadas personas o grupos humanos tradicionalmente marginados o discriminados, con el único propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado social.

De acuerdo con el **Protocolo para Juzgar con perspectiva de género** emitido por el Pleno de la SCJN, se estima que el los juzgadores están obligado a hacer efectiva, ***en condiciones de igualdad***, la deliberación pública mediante la cual se defina el marco de referencia de la justicia y la forma en que los derechos serán garantizados y protegidos.

En este contexto, la SCJN señaló que la implementación de estas medidas no puede ser arbitraria y que también se encuentran sujetas a un análisis de razonabilidad.

Por otro lado, los artículos 1° Constitucional[[13]](#footnote-13) y 1, 2, 4 y 5[[14]](#footnote-14) de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, disponen que corresponde al Estado promover las condiciones para que la **libertad** y la **igualdad** de las personas sean reales y efectivas.

1. **ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS**
	1. **En cuanto a la Facultad del CG para Emitir Acciones Afirmativas.**  Las partes promoventes, señalan que el CG ha sido omiso en cuanto a la emisión de lineamientos relativos a garantizar condiciones de igualdad para los grupos en situación de vulnerabilidad, mediante acciones afirmativas a efecto de un real acceso a candidaturas y por consecuencia, a cargos públicos.

A tales afirmaciones, la autoridad responsable en su informe circunstanciado, manifiesta que, si bien reconoce que es necesario realizar acciones para lograr una mayor participación de las personas que pertenecen a un grupo vulnerable, “*no existe disposición alguna que establezca la obligación de emitir un lineamiento, reglamento o protocolo en el que se prevean acciones afirmativas en favor de grupos de situación de vulnerabilidad”.*

Considera el IEE, que se encuentra imposibilitado para implementar y reglamentar las acciones afirmativas pretendidas por la promovente, pues a su parecer, *“se realizaría un ejercicio excesivo de su facultad reglamentaria, transgrediendo el principio de reserva de ley”.*

Además, señala la autoridad responsable, que la inclusión de una medida afirmativa, en esta etapa del proceso comicial, impactaría en el resto de las etapas violentando así el principio de certeza.

Este Tribunal, considera que tal agravio es **fundado** por los siguientes razonamientos:

De conformidad con los artículos 116 fracción IV, inciso b) y c) de la Constitución; 17 apartado B, de la Constitución Local; 66 primer párrafo del Código Electoral, tenemos que el IEE es un organismo público dotado de personalidad jurídica, que goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus determinaciones y opera bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad, definitividad, objetividad, paridad y **perspectiva de género.**

El Código Electoral en su artículo 75, fracciones XX y XXX, faculta al CG, para emitir los reglamentos necesarios a fin de cumplir con su obligación como garante de los principios electorales, esto es, tiene facultad reglamentaria[[15]](#footnote-15) suficiente para aprobar los lineamientos necesarios que salvaguarden los derechos de cada uno de los actores políticos y de la ciudadanía.

Esto, porque, la finalidad primordial del IEE, en el ejercicio de sus atribuciones, no puede estar limitada a la mera aplicación de las normas y reglamentos relativos a los procesos electorales que sean producto del legislador ordinario o de los ordenamientos expedidos por la autoridad central -INE-, sino que también, debe accionar las facultades que la misma norma le atribuye, más las obligaciones que el Estado le impone, a efecto de observar, en conjunto, todos los derechos y prerrogativas que constituyen el marco de los procesos democráticos, y así cumplir puntualmente con su encomienda.

Lo anterior, encuentra sustento en el reconocimiento que la Constitución Federal y los criterios internacionales hacen, respecto de los derechos fundamentales, donde se exige a las autoridades a atender todas las normas e instrumentos, como un medio para encaminar e impulsar el real ejercicio de los derechos de las personas.

Esto, significa que no es permisible que cada acto se asuma como aislado, máxime, como en el caso, cuando se trata de grupos de personas que históricamente han sido vulneradas de forma sistemática, pues estos asuntos de forma obligada deben atenderse con especial cautela por parte de las autoridades para no causar una afectación mayor.

En este sentido, tal como se refiere en el acuerdo INE/CG18/2021, en la parte conducente al análisis de los procesos electorales en cuanto a procesos inclusivos, Aguascalientes no figura entre las entidades que los garanticen, debido a la falta de avance en la creación de normativa que permita impulsar o catalizar el ideal de igualdad en cuanto a la inclusión en la vida pública que a estos grupos se les debe, por lo que, es necesaria su pronta instrumentalización.

Sin embargo, el hecho de que no exista una normativa específica, o que el legislador no haya producido la reglamentación de estos derechos, no justifican la omisión de la que se duele la promovente.

Ahora bien, considerando la normativa federal vigente, así como las determinaciones que han antecedido este juicio, es posible concluir que el IEE cuenta con la facultad, no solo de aplicar las reglas que rigen el proceso electoral, así los derechos y principios sustantivos, sino que, además, debe generar las condiciones que permitan que el proceso electoral opere de forma coherente y sincrónica, optimizando su aplicación y teniendo como eje transversal los derechos humanos, así como los principios de igualdad y no discriminación.

En esa lógica, se posibilita al IEE su posición de garante de estos principios, atribuyéndole la facultad al CG para emitir los reglamentos y acuerdos necesarios para la debida regulación de distintas etapas del proceso electoral, llevando a detalle el contenido de la norma.

Ejemplo de lo anterior, es justamente la reglamentación de las medidas afirmativas de género que se dictan al inicio del proceso electoral. Tales normas en sentido material, inciden incluso en los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular y las precampañas, puesto que llevan a detalle el cómo ha de lograrse la paridad sustantiva.

De esto, es inconcuso que le fue atribuida la facultad para emitir acuerdos a través de los cuales se materialicen o instrumenten, entre otras cuestiones, las reglas de paridad de género y las acciones afirmativas en favor de grupos en situación de vulnerabilidad, que se deben seguir de cara a la formación de la representación popular.

Máxime, que las acciones afirmativas se deben emitir con el propósito de revertir escenarios de desigualdad histórica a la que se enfrentan ciertos grupos vulnerables.

Así, el CG tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias y suficientes para concretar y materializar en los procesos electorales los principios de igualdad y no discriminación, y crear mecanismos bastos para garantizar que la ciudadanía ejerza plenamente sus derechos, esto es, entablar medidas afirmativas para las personas en situación de vulnerabilidad a efecto de que puedan acceder en igualdad de condiciones a los cargos de elección popular, emitiendo lineamientos o reglamentos que eliminen los obstáculos que históricamente han causado vulneración a sus derechos.

Entonces, resulta manifiesto que el CG sí cuenta con facultades para regular la pretensión de la promovente, pues contrario a lo señalado en el informe circunstanciado, no extralimita sus atribuciones toda vez que es su obligación ejecutar acciones que maximicen los derechos humanos y la no afectación de los principios de no discriminación e igualdad, mediante actos tendentes a una democracia inclusiva, removiendo los obstáculos que colocan en situación de vulnerabilidad a la ciudadanía que representa la promovente.

Bajo esa premisa, es menester que el IEE, incorpore medidas y acciones que mengüen paulatinamente la afectación histórica y social a la que se han enfrentado estos grupos, con el fin de evolucionar a un sistema democrático que garantice la igualdad y la no discriminación.

Igualmente, la Sala Superior, en el recurso de apelación 121/2020[[16]](#footnote-16), estableció que la autoridad administrativa electoral cuenta con atribuciones suficientes que le dan la facultad de expedir los reglamentos y acuerdos necesarios para normar lo que sea menester respecto de la postulación de candidaturas a los cargos públicos de elección popular.

Así, que la reglamentación que se haga sobre esa temática -postulación de candidaturas-necesariamente alcanza a los procesos de selección interna, porque de éstos emanan quiénes habrán de ser inscritos a la contienda electoral. Por lo tanto, esas normas en sentido material, deben forzosamente garantizar que el resultado de su implementación corresponda a los principios y bases constitucional, convencional y legalmente establecidos.

Así, el pleno de la SCJN, en la Jurisprudencia P./J. 79/2009, de rubro **FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES**, señala que la facultad reglamentaria ha de ejercerse al amparo de los principios derivados del de legalidad, específicamente los de reserva y primacía de la ley, motivo por el cual no debe incidir en el ámbito reservado al constituyente y el legislador.

Si bien es cierto que la facultad reglamentaria por parte del CG, cuenta con limitaciones pues no deben ejercerse al libre arbitrio de las autoridades electorales, sino que, deben analizar los supuestos que permitan advertir su necesidad, proporcionalidad e idoneidad, evitando que se utilicen indiscriminadamente, lo cierto es que en el caso concreto, al ser una obligación Constitucional y Convencional relativa a quitar obstáculos para el ejercicio de derechos bajo el principio de Igualdad y no Discriminación, la Autoridad Responsable no tiene impedimento alguno para implementar las Acciones Afirmativas en beneficio de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Entonces, al igual que lo razonado en la Sentencia de Sala Superior SUP-RAP-121/2020, este Tribunal considera que, *contrario a lo que argumenta la autoridad responsable*, en el caso concreto no se transgrediría el principio de reserva de ley, y en el caso, la facultad reglamentaria se vería materializada en disposiciones enfiladas a dar sentido y alcance al marco jurídico aplicable, lo que significa que no se modificaría la ley, pero si detallaría supuestos de aplicación.

Aunado a lo anterior, es oportuno recalcar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, resultado de un escrito presentado por la promovente en el que solicitó que se pronunciara respecto de la *supuesta* omisión del IEE de no implementar acciones afirmativas en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad, en fecha veintiocho de enero, emitió una consideración dirigida al Consejero Presidente del IEE -y que obra en autos-, en la que medularmente señala:

*“Con el objeto de sumar a una cultura de respeto a los Derechos Humanos, sabedor del compromiso que el Instituto ha mostrado con los Derechos Fundamentales y el orden constitucional, y en respeto a su autonomía, le hago llegar la siguiente consideración.*

*[…]*

*Tras este análisis, esta Comisión considera que el planteamiento que hace Salma Luévano Luna en el sentido de que se deben implementar acciones afirmativas en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad como los de la comunidad LGBTIQ+ está protegido por la Constitución Mexicana, pues es de todos y todas conocido que las personas pertenecientes a grupos minoritarios han sido discriminadas históricamente y que para lograr el ejercicio y respeto de sus derechos en iguales condiciones a las personas pertenecientes a grupos mayoritarios es necesaria la intervención del Estado, en especial tratándose del ejercicio de derechos político-electorales en donde la falta de representación de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad o de discriminación es tan evidente […]*

*Por ello y en atención a la obligación constitucional que tienen todas las autoridades del Estado Mexicano de prevenir violaciones a los Derechos Humanos y garantizar su respeto, es que esta Comisión considera que el Instituto Estatal Electoral debería realizar los ajustes normativos y a los procedimientos administrativos necesarios implementando acciones afirmativas temporales orientadas a acelerar la igualdad de facto que garanticen la participación de personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas, y pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ en los procesos político electorales, sobre todo del derecho a ocupar cargos públicos de elección popular, en cumplimiento al orden constitucional y orientadas a consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos”[[17]](#footnote-17)*

Si bien, tal consideración no es vinculante, lo cierto es que manifiesta la necesidad de implementar las acciones afirmativas que pretenden las partes promoventes, pues en el marco de la Constitución se encuentra el basto sustento legal para que el CG regule e implemente éstas, en aras de alcanzar la igualdad para todos los grupos vulnerables de cara a los comicios.

Por lo tanto, la queja de la promovente en cuanto a que el CG fue omiso en la producción de reglamento alguno que formulara medidas afirmativas en favor de grupos en situación de vulnerabilidad, resulta **fundada,** toda vez que como ha sido precisado, la autoridad responsable sí tiene facultades y atribuciones para reglamentar, y en ese sentido, ha faltado a su deber de garante de derechos y principios, puesto que se ha limitado a simplemente reconocer el estado de necesidad, de desigualdad y de invisibilización de los grupos en situación de vulnerabilidad.

En conclusión, la autoridad sí debió contemplar reglamentación que atendiera a la necesidad de migrar a los grupos en situación de vulnerabilidad a un plano de igualdad material y sustantiva, lo que debió traducirse en medidas afirmativas con miras al acceso a la función pública.

Por lo tanto, se advierte que el CG tiene facultades no solo para implementar sino para diseñar las acciones necesarias para garantizar la igualdad y no discriminación de los grupos en situación de vulnerabilidad.

**Sobre el Deber de Implementar Acciones Afirmativas.**  Este Tribunal, ha sostenido[[18]](#footnote-18) que las prácticas comunes reproducidas por las instituciones y la sociedad, provocan que las personas enfrenten distintos escenarios sociales, políticos, económicos y éticos, y diferentes oportunidades de desarrollo y de consecución de sus planes de vida, debido a su pertenencia a grupos en situación de exclusión sistemática e histórica. Sistemática por cuanto es persistente y presente en todo el orden social, e histórica en relación a su origen y permanencia en el tiempo.

Por ello, la obligación positiva más importante a cargo de los Estados, derivada de esta discriminación,[[19]](#footnote-19) consiste en adoptar tanto medidas transformativas, permanentes o temporales para eliminar las desventajas de esos grupos sociales que reviertan el entorno social, cultural e institucional que permite o provoca la discriminación,[[20]](#footnote-20) como acciones que aceleren la igualdad de facto y promuevan la inclusión de sectores históricamente excluidos al ámbito público o de servicios como la salud o la educación.

Como se ha dicho, respecto a esa necesidad de nivelación, la SCJN determinó que las autoridades no solo pueden, sino que **tienen la obligación de distinguir** entre las personas, siempre que esa distinción sea razonable y objetiva, para efecto de visibilizar los casos de discriminación y llevar a cabo las medidas necesarias para erradicarla.[[21]](#footnote-21)

En ese entendimiento, el CG es garante de los derechos de la ciudanía, y tiene la obligación de ejecutar acciones que potencialicen el real ejercicio de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante la implementación de lineamientos o reglamentos que contengan medidas afirmativas en su favor.

Estas acciones afirmativas[[22]](#footnote-22), encuentran su fundamento en la jurisprudencia 43/2014 de rubro: ***“*ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL”**, en donde precisamente se dice que se trata de medidas compensatorias que tienen como objetivo, contrarrestar la disparidad social de los grupos ya mencionados.

Además, en la Jurisprudencia 30/2014, de rubro: **“ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN”**, se determinó que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones desfavorables, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales[[23]](#footnote-23).

En ese sentido, se estableció que los elementos que caracterizan a este tipo de acciones son: **temporal**, porque constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se proponen; **proporcional**, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; así como **razonables y objetivas**, ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado.

De igual forma, en la Jurisprudencia 11/2015, de rubro: **“ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.”** La Sala Superior interpretó que el Estado mexicano tiene la obligación de establecer acciones afirmativas en tanto constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material.

 En esa línea, la Sala Superior y Salas Regionales han establecido que los elementos fundamentales de las acciones afirmativas son:

*a)* ***Objeto y fin.*** *Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades.*

 *b)* ***Destinatarias****. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos.*

 *c)* ***Conducta exigible****. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos.*

Bajo tales consideraciones, las acciones afirmativas son un mecanismo equiparador de desigualdades sociales, ya que promueven una igualdad sustancial entre todos los miembros de la sociedad y los grupos desventajados, y los reivindica, al establecer prácticas o reglas dirigidas a la eliminación de las desigualdades de hecho y el restablecimiento de los derechos fundamentales a la igualdad en su dimensión material, y en cuanto a lo que hace a la materia político-electoral, estas medidas han sido utilizadas como mecanismos reivindicadores en la participación política inclusiva[[24]](#footnote-24).

Así, como ya se dijo en párrafos anteriores, las autoridades que conforman el Estado Mexicano deben adoptar medidas pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en su propia Constitución, lo que implica el ejercicio de sus facultades, mediante la emisión de criterios, reglamentos y prácticas que aceleren la igualdad de condiciones en el ejercicio de derechos.

Por tanto, no existe justificación en la omisión respecto a emitir acciones afirmativas en favor de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, por lo que se advierte que es éste el mecanismo idóneo para revertir la transgresión a sus derechos y la discriminación de la que han sido objeto a lo largo de la historia.

En esa inteligencia, el CG con fundamento a lo dispuesto por la Constitución Federal y el marco convencional, está obligado a implementar acciones que quiten todo obstáculo para que las personas de grupos en situación de vulnerabilidad participen de forma igualitaria en los procesos de designación de candidaturas e integración de cargos de elección popular, teniendo como guía para su diseño, los parámetros que marcan las jurisprudencias tanto de la Sala Superior, como de la SCJN y los criterios internacionales -apuntados en párrafos anteriores-, en cuanto a los límites de la facultad reglamentaria, y las características que deben estudiarse para instrumentar y materializar los mandatos constitucionales.

* 1. **Posibilidad de Implementación de las Acciones Afirmativas en Favor de Personas de Grupos en Situación de Vulnerabilidad para el Acceso a Candidaturas y Cargos de Elección Popular en el PEL 2020-2021.** Para este Tribunal, las acciones afirmativas solicitadas por las promoventes, pueden converger en el proceso en curso, siempre que estas no tengan sobre el mismo, un efecto retroactivo, transgredan, o incluso, dejen sin efectos las etapas que ya han sido concluidas, pues para garantizar la certeza en el proceso electoral, éstas deben quedar intocadas.

Como ya se expuso, la Constitución y las leyes de la materia, consagran al principio de igualdad como auténticos mandatos concretos de optimización dirigidos a implantar y materializar, la igualdad como eje transversal de conformación de los órganos colectivos.

Con base en éste, la normativa obliga a las autoridades a dictar las normas y reglamentos suficientes y necesarios para lograr la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad en la postulación de candidaturas y elección de cargos populares.

En ese sentido, es oportuno retomar que Sala Monterrey, en el relativo SM-JDC-0349/2020[[25]](#footnote-25), señaló que las autoridades electorales administrativas *-el IEE-,* en el ejercicio de sus atribuciones, pueden implementar medidas que garanticen el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con independencia de que se emitan con 90 días antes del inicio del proceso electoral, porque esta regla opera para promulgación y publicación de leyes.

Sin embargo, pese a que los agravios presentados por las promoventes resultan **fundados,** es necesario tener claro el contexto actual y la temporalidad de las etapas del PEL 2020-2021, a efecto de determinar la viabilidad de la implementación de tales acciones afirmativas de acuerdo a la etapa que transcurre dentro del proceso comicial actual.

Es decir, debe analizarse, desde la perspectiva de la etapa que transcurre del proceso electoral a este momento, si resulta viable, o no, la implementación de medidas afirmativas y en ese sentido determinar en qué forma pudieran adaptarse sin trastocar la certeza y legalidad que rigen al sistema democrático.

En ese sentido, se esquematizarán datos relevantes de la Agenda Electoral que permitan de una forma visual, observar el desarrollo del PEL 2020-2021 y sus etapas.

**Agenda Electoral PEL 2020-2021.**

En primer lugar, se muestra una tabla[[26]](#footnote-26) donde se observan las fechas de las etapas de precampañas, solicitud de registros, campañas y registro de candidatos:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA | INICIO | FIN | RESPONSABLE | FUNDAMENTO |
| PRECAMPAÑAElección del H. Congreso del Estado y de Ayuntamientos con más de cuarenta mil habitantes. | 02 de enero | 31 de enero | Partidos políticos y precandidaturas. | Art. 132 párrafo tercero, fracción II y último párrafo del Código Electoral.  |
| PRECAMPAÑAPara la elección de Ayuntamientos con menos de cuarenta mil habitantes. | 12 de enero | 31 de enero | Partidos políticos y precandidaturas. | Art. 132 párrafo tercero, fracción II y último párrafo del Código Electoral.  |
| REGISTRO DE CANDIDATOSA la elección de Ayuntamientos y H. Congreso del Estado. | 15 de marzo | 20 de marzo | Partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, aspirantes a candidaturas independientes, Consejos Distritales Electorales.  | Arts. 144 y 387 A del Código Electoral.  |
| CAMPAÑASPara la elección de Diputados y de Ayuntamientos con más de cuarenta mil habitantes. | 19 de abril | 02 de junio  | Partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes | Art. 161 fracciones II y III inciso a) del Código Electoral.  |
| CAMPAÑASPara la elección de Ayuntamientos con menos de cuarenta mil habitantes. | 04 de mayo | 02 de junio | Partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas | Art. 161 fracción III inciso b) del Código Electoral.  |
| JORNADA ELECTORAL | 06 de junio | 06 de junio | INE, IEE, Ciudadanía Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla | Arts. 126, 131 y 193 del Código Electoral. Art. 273 de la LGIPE. |

De la tabla anterior, se observa que el Código Electoral establece que la fecha límite para que los Partidos Políticos realizaran el registro de sus aspirantes a candidaturas y agoten la etapa de precampañas fue el día **treinta y uno de enero pasado.**

Es menester señalar que del análisis[[27]](#footnote-27) de las convocatorias y sitios web de los Partidos Políticos, se tiene que, para algunos Partidos, los plazos de inscripción y selección interna han sido agotados.

Por otro lado, del mismo análisis es posible observar que los mecanismos internos de selección varían de acuerdo a lo que mandatan sus normativas, *a saber*, encuestas, precampañas, insaculación, asambleas, es decir, mecanismos que buscan interactuar con la militancia a efecto de que sea ésta quien decide los candidatos que encabezarán las campañas comiciales; y en algunos casos, la elección es por medio de un consejo o un órgano interno quienes, bajo sus lineamientos, designan a las personas que representarán su ideal y estrategia política.

Esto es, de acuerdo a las fechas que los institutos políticos han hecho públicas y que se han apuntado en los esquemas que obran en autos, se encuentran agotadas etapas en las que los ciudadanos, militantes, o simpatizantes, han cumplido con lo que mandatan las reglas y normas actuales, tan es así, que las partes promoventes se ostentan como aspirantes a candidaturas, incluso haciendo públicos sus registros como precandidatas a diputaciones, tanto locales como federales, sin que manifiesten o evidencien algún obstáculo en cuanto a su registro.

Bajo ese contexto debe analizarse la manifestación de los promoventes respecto a la ausencia de impedimentos para modificar las reglas de postulación actuales, es decir, deben justipreciarse sus pretensiones a la luz de las etapas de los respectivos partidos políticos, así como del proceso electoral, ya que éstas, al ser de observancia obligatoria a todos los participantes, tanto las autoridades, institutos políticos, precandidatos, candidatos, ciudadanos, militantes, candidatos independientes y demás actores políticos, garantizan la seguridad jurídica, la equidad, la certeza, y la definitividad de las etapas del proceso electoral.

Por lo tanto, se considera por una parte **fundado**, porque tomando en consideración lo resuelto por Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-121/2020, si bien, ya se determinó que le asiste razón a las promoventes en cuanto a la pretensión relativa a la emisión de acciones afirmativas, por el otro es **inoperante**, en cuanto a los alcances plenos de su implementación para este proceso, ya que ésta se encuentra comprometida y sujeta a las etapas que ya han transcurrido del proceso electoral actual y a los derechos de postulación de los partidos políticos y los derechos de los militantes y ciudadanos aspirantes a una candidatura bajo cualquier principio.

En ese sentido, implementar acciones afirmativas que modifiquen radicalmente las etapas de registro de los partidos políticos, trastocaría la certeza de los procesos comiciales, así como las esferas de derechos político-electorales, en cuanto a la seguridad jurídica de tantos otros ciudadanos que ya han cumplido con las etapas internas de sus partidos, amén de que no tenemos la certeza de si, resultado de los procesos internos de selección o del apoyo ciudadano, se registrarán candidatos *-de partido, de coaliciones o independientes-* que pertenezcan a un grupo en situación de vulnerabilidad.

Por cuanto hace a la certeza, la Sala Superior, de manera reiterada, ha establecido que dicho principio consiste en que los participantes en cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de los comicios que permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con claridad y seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales[[28]](#footnote-28)

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 98/2006, de rubro: “**CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO”**, estableció que el principio de certeza en materia electoral, contenido en el artículo 41, fracción III, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que al iniciar el proceso electoral los participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento.

Así, la emisión de acuerdos como el que se pretende, constituye una instrumentación accesoria y temporal, tendente a modular determinadas cuestiones inherentes a la postulación de las candidaturas, no significa de forma alguna, una modificación legal fundamental, o que afecte en medida alguna el principio de autoorganización de los Partidos Políticos, por lo tanto, no contraviene la prohibición de modificar disposiciones legales durante el curso del proceso electoral y, por ende, no transgrede el principio de certeza en materia electoral.

Es de esta forma, porque la pretensión de las promoventes es que las acciones afirmativas requeridas, sean ejes transversales que deban impregnar toda decisión de las autoridades, y conlleven el respeto absoluto al **principio de igualdad** en cualquiera de sus manifestaciones, buscando evitar cualquier tipo de discriminación basada en cualquiera de las categorías sospechosas a que se ha aludido en esta resolución.

Por lo tanto, este Tribunal advierte que el CG está facultado para emitir acciones afirmativas que considere pertinentes y viables, y, además tiene el deber de diseñarlas tomando en consideración las etapas del PEL 2020-2021, valorando los derechos de los militantes, aspirantes y simpatizantes de los Partidos Políticos, con miras a procesos subsecuentes, teniendo como base, *no limitativa¸* lo que se ordena en el apartado de efectos de esta sentencia.

* 1. **La Acción Afirmativa No Afecta la Libre Autodeterminación de los Partidos Políticos.** Como ya ha sido determinado, este Tribunal considera que les asiste la razón a los promoventes en cuanto a que el IEE es competente para regular el cómo se habrán de postular las candidaturas. Sobre esa base, es garante no solo de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, sino de los derechos de los partidos políticos y sus militantes, así como de la ciudadanía aspirante a una candidatura, esto, en cuanto a los factores que deben tomarse en cuenta para el diseño de la acción afirmativa que se pretende.

En ese sentido, la Constitución Federal en los artículos 41, 35 y 53, establece que los Partidos políticos tienen la obligación de observar el principio paritario en todo lo vinculado con los procesos democráticos, de lo que no escapa la postulación de candidaturas y los actos necesarios para llegar a ese supuesto, sin que se pierda de vista que la finalidad no es solo la postulación igualitaria por razón de géneros, sino la representación política en igualdad de circunstancias, sin la existencia de sesgos construidos a partir de las categorías sospechosas consignadas por el artículo 1 de la propia Carta Magna.

Visto desde tal perspectiva, las medidas afirmativas no pueden vulnerar los principios de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, pues éstas, constituyen meras modulaciones tendentes a la obtención de un bien público superior, lo que es armónico con los principios de igualdad y no discriminación.

De tal suerte que, la acción afirmativa pretendida, debe cumplir con una finalidad constitucionalmente exigida y no implicar una transgresión desmedida a otros principios democráticos y fundamentales de los partidos y la militancia; es decir, no puede constituir una medida arbitraria, dado que encuentra justificación en la Carta Magna, y tiene una finalidad acorde con los principios de un Estado democrático de Derecho y es adecuado para alcanzar el fin.

Por ello, se debe tener en cuenta que no solo las autoridades están obligadas al respeto de los principios de paridad e igualdad en todos los aspectos que involucran su acatamiento, sino que también ahora, los partidos políticos están vinculados al acatamiento irrestricto de ellos.

Es decir, los Partidos están obligados a regir sus actuaciones conforme al eje transversal, instituyendo la perspectiva de género y la inclusión como un medio para deshacer las prácticas hegemónicas y obstaculizadoras de la diversidad ideológica y social.

Bajo esta perspectiva, se inserta una tabla[[29]](#footnote-29) que contiene, de manera general la evolución regulatoria contenida en los documentos básicos de los partidos políticos en cuanto a la inclusión de personas de grupos en situación de vulnerabilidad.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Partido Político** | **¿Prevé Políticas de Inclusión?** | **Fundamento en sus Documentos Básicos** |
| MORENA | SI, cuenta con una secretaría de la Diversidad Sexual. | Artículo 32° de los Estatutos. |
| PAN | SI | Plan de acción 15 y 41 |
| PRI | SI | Plan de acción punto 48 |
| PT | NO |  |
| PVEM | SI | Programa de AcciónCapítulo de Derechos Políticos. |
| PRD | SI | Reglamento de la organización nacional de mujeres del partido de la revolución democrática y estatuto. Artículos 9 y 21 |
| Partido Encuentro Solidario | NO |  |
| Movimiento Ciudadano | SI | Artículo 4,57 y 95, Estatutos |
| Partido político Fuerza por México | SI | Artículo 71, Estatutos. |
| Partido local Libre de Aguascalientes | NO |  |
| Partido Nueva Alianza | SI | Artículo 107, Estatutos. |
| Partido político Redes Sociales Progresistas | SI | Artículo 48, Estatutos |

Ahora bien, en suma a lo anterior, a efecto de contar con un panorama mayor, es importante destacar algunos datos precisados en el acuerdo INE/CG18/2021 referentes a la participación de grupos en situación de vulnerabilidad.

En este acuerdo[[30]](#footnote-30), se hace una síntesis del estudio denominado **“Personas con Discapacidad postuladas por los partidos políticos a cargos de elección popular en las elecciones federales y concurrentes del PEF 2017-2018, elaborado con información entregada por los nueve PPN que participaron en dicho Proceso Electoral (PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y MORENA)”**, en la que se indica que:

*“Los nueve (9) PPN que participaron en el PEF 2017-2018, registraron 61 candidaturas de personas con discapacidad a 57 cargos de elección popular.*

*- En cuatro (4) fórmulas, las personas propietaria y suplente fueron personas con discapacidad.*

*- 40 (65.67%) fueron personas propietarias y 21 (34.43%) suplentes.*

*- 21 (34.43%) fueron mujeres y 40 (65.57%) hombres.*

*- Se registraron como candidatas personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, del habla, talla baja y que viven con parálisis cerebral. En la siguiente tabla se desglosan los tipos de discapacidad reportados:*

******

*-19 (31.15%) contendieron a cargos federales y 42 (68.85%) a cargos locales.*

***Los tipos de discapacidad a Cargos Federales reportados por los PPN fueron los siguientes:***

**

**

*Estas diecinueve (19) candidaturas representan el 0.27% de las 6,899 candidaturas federales postuladas para participar en la Jornada Electoral Federal 2018. Las candidaturas a Cargos Federales por entidad, para personas con discapacidad, fueron las siguientes:*

******

*De las diecinueve (19) candidaturas, sólo ocho (8) resultaron ganadoras.”*

Con base a esta información, es congruente señalar que una acción afirmativa que se propone es idónea, porque busca construir un diseño que garantice el derecho de las personas con discapacidad para acceder a candidaturas a cargos de representación popular, para concretar el avance en el ejercicio del derecho a ser votado que en favor de las personas con discapacidad que se persigue a través de la presente determinación.

En ese sentido, el mismo acuerdo del INE, establece que solamente el PRI prevé en sus estatutos que ese partido político garantizará, entre otros, la postulación de personas con discapacidad.

Por lo tanto, queda expuesta la necesidad de que los institutos políticos de modificar e implementar acciones que favorezcan a grupos en situación de vulnerabilidad en cuanto a la postulación de candidaturas.

Por lo anterior, se exhorta a los partidos políticos para que, conforme a sus facultades, ante lo avanzado de las etapas internas de selección de candidatos para este proceso electoral, hagan participes, visibilicen y materialicen la equidad, la igualdad y la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad, para que a través de sus institutos políticos accedan a candidaturas y cargos de elección popular.

Por tanto, este Pleno advierte que las recomendaciones a los Partidos Políticos en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad no presuponen un riesgo o una intromisión grave a la vida interna de los partidos, sino que es una medida temporal a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad que responde a la finalidad de alcanzar la representación política necesaria para consolidar una democracia inclusiva.

En consecuencia, los Partidos Políticos, como promotores de la democracia, deben transitar hacia una inclusión en sus procesos, a efecto de que los grupos vulnerables puedan ser partícipes y ejerzan sus derechos político-electorales en un plano de igualdad y no discriminación.

* 1. **Del Congreso Local.** Las partes promoventes señalan que se requieren Acciones Afirmativas en forma de cuota, a fin de garantizar una representatividad que refleje efectivamente a la sociedad en el congreso, bajo la aseveración de que “*en toda la historia de la conformación del Congreso del Estado, y de Ayuntamientos, no se ha elegido a persona alguna de la comunidad LGBTIQ+ (al menos abiertamente), ni personas con discapacidad.”*

También, manifiestan que, *respecto a la integración histórica carente de participación por parte de personas de grupos vulnerables*, si bien es evidente la desventaja y menoscabo de derechos a los que se han enfrentado, resulta **inatendible** en virtud de que no existen elementos que permitan a este Tribunal corroborar la aseveración de quienes promueven.

Debe señalarse que si bien es cierto que la información de quiénes son candidatos y de quiénes finalmente conforman tanto el Congreso, como los Ayuntamientos, es del dominio público, también lo es que no se cuenta con datos estadísticos concretos que permitan a esta autoridad saber, a ciencia cierta, en qué medida participan y representan ciudadanos pertenecientes a algún grupo en situación de vulnerabilidad, ya que no se tiene por parte de ninguna autoridad de las involucradas, un registro que permita obtener datos con estas características, aunado a que son datos sensibles[[31]](#footnote-31).

Ahora bien, cabe precisar que las promoventes solamente hacen la manifestación sin medios de prueba con los cuales se pueda sostener su aseveración, lo cual deviene en un agravio **parcialmente fundado** por las siguientes consideraciones:

La Constitución Federal en el artículo 49 establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Por su parte, el numeral 40 de la Carta Magna hace mención de que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

De ahí que, dicha disposición mandata que las entidades federativas se regulen a través de una Constitución propia, sus respectivas leyes secundarias y reglamentos. De igual manera, cuentan con órganos legislativos, ejecutivos y judiciales.

Específicamente, el Poder Legislativo se constituye como el **generador de las normas con rango de ley**, además de ser el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno.

En el caso de Aguascalientes, el artículo 15 de la Constitución Local establece en cuanto a la función legislativa que:

“*se deposita en una corporación denominada Congreso del Estado. Éste, se regirá bajo los principios del modelo de parlamento abierto, por lo que deberá implementar mecanismos que garanticen la transparencia, la máxima publicidad, el derecho de acceso a la información, la apertura gubernamental, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.*

*Las obligaciones de los Diputados se establecen el artículo 17 párrafo noveno de la Constitución de Aguascalientes y consisten en el ejercicio de las funciones legislativa, de representación popular, fiscalización, nombramiento, presupuestal, de control, jurisdiccional, sanción y demás que establezcan las leyes; y desempeñarán sus funciones en el Pleno del Congreso del Estado, Diputación Permanente, Gran Jurado, Comisiones y Comités del Poder Legislativo.*

*Ahora bien, el artículo 8° de la Ley Orgánica[[32]](#footnote-32), otorga al Congreso del Estado de Aguascalientes las siguientes facultades:*

1. ***Aprobar y expedir normas de observancia general y obligatoria en el Estado de Aguascalientes, con el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos, en las materias de su competencia determinadas en la Constitución Federal, la Constitución del Estado y las leyes que de ambas emanen.”***

Ahora bien, las conformaciones del Congreso previo a la reforma del 2014, obedecieron a una representatividad pura o formal, que se traducía en una **Representación Numérica**, es decir, el número y las características de los dirigentes políticos que acceden a los cargos era correspondiente al espacio territorial y al número de ciudadanos representados, garantizando la efectividad del voto en un sentido simple, o sea, el número de votantes era proporcional a la representación materializada en lugares legislativos.

Posteriormente, tras las reformas político-electorales del año 2014, México vio nacer un nuevo marco constitucional y de leyes secundarias en materia político-electoral, que tienen enmarcadas una serie de preceptos que buscan entre otras cosas Congresos, Ayuntamientos y Autoridades electorales mayormente representativos, igualitarios e inclusivos.

Esta reforma en materia político electoral fue punta de lanza para que la política en nuestro país y nuestro Estado de Aguascalientes cambiara, pues anteriormente para la postulación de candidatos para la integración de los Congresos de los Estados y Ayuntamientos, no se observaban ningún tipo de norma, acción o principio.

En ese entendimiento, la conformación del poder legislativo evolucionó a una **Representación Sustantiva,** es decir, la introducción de prioridades y de una agenda legislativa específica por parte de aquellos elegidos para los puestos representativos, suponiendo una diferencia en la actividad legislativa y en la aprobación de políticas públicas de igualdad de género.

Así, la mayor participación de mujeres en el órgano legislativo se ha transformado en la introducción de una agenda de género en los trabajos legislativos y en una mayor aprobación de medidas, programas y leyes con orientación de género.

De tal forma que la conformación del Congreso transitó hacia la igualdad consolidando la representación de las mujeres, hasta culminar con la inclusión en el ordenamiento legal de la paridad sustantiva, ordenando la integración paritaria del Congreso, en la medida de lo posible en sede administrativa, hecho que se constata a la luz de las posiciones que ocupan en la actual Legislatura conformado por 13 hombres y 14 mujeres.

En cuanto a la conformación de los Ayuntamientos, estos han seguido suerte similar que el Congreso, evolucionando, por medio de la paridad vertical y horizontal a su conformación paritaria, sin embargo, al igual que en el Poder Legislativo, es menester que la legislación entable una conformación que garantice en los Gobiernos Municipales, una representatividad que refleje los intereses de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Ahora, el poder legislativo local, como parte del Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos, diseñando normas y reformando con el fin de garantizar la inclusión tanto en postulación como en la conformación de los órganos colegiados, observando los mandatos convencionales, constitucionales y legales en cuando la paridad de género, principio de igualdad y no discriminación en beneficio de grupos vulnerables.

Motivo por el cual, el mandato de integración paritaria, es una de las formas de lograr la igualdad, sin embargo, debe lograrse una igualdad sustantiva y material en todos los niveles de gobierno, lo que obliga, como ya se apuntó, a nivelar, visibilizar, abrir oportunidades, evolucionar la representación política y hacerla un verdadero reflejo de la sociedad, a fin de alcanzar una verdadera **representación social**.

Por tal razón, las acciones afirmativas a favor de la mujer, con las que se ha logrado una paridad 50/50, ya no son suficientes para lograr la igualdad e inclusión, pues estas acciones dejan de lado a grupos en situación de vulnerabilidad que históricamente discriminados y tratados desiguales, por lo que la sociedad perteneciente a estos grupos, demanda que sus derechos sean garantizado en un real ejercicio que se traduzca en lugares del congreso a fin de lograr una verdadera representación sea un reflejo de la sociedad.

Así, tenemos que, en el Estado, no se ha legislado, ni se han materializado normas de carácter general, o diseñado acciones afirmativas donde se visibilicen los grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente desprotegidos, y se procure su inclusión a la vida política del Estado.

En ese entendido, lo conducente es dar vista al Congreso del Estado, para que en el en atención al marco legal y convencional vigente, de acuerdo al más amplio ejercicio de sus facultades, prevea las normas que considere, de acuerdo a la realidad social del Estado sean necesarias para, dar cumplimiento al principio de paridad, igualdad y no discriminación en la postulación de las candidaturas a los puestos de elección popular locales y en la conformación de las autoridades, normas que deberán ser aplicadas por el Organismo Público Local en materia electoral, para los procesos electorales subsecuentes.

Con esto, se pretende que la labor legislativa del Congreso, en conjunto con la debida aplicación de las normas y las acciones afirmativas, no solo lograrán visibilizar a los grupos vulnerables, sino que garantizarán el real ejercicio de sus derechos en un plano de igualdad y no discriminación en los próximos procesos comiciales.

* 1. **Efectos Aplicables para el Actual PEL 2020-2021.** Por todo lo anterior, esta autoridad concluye que las autoridades, deberán atender, para este y los próximos procesos electorales, la reglamentación necesaria que contiene el mandato de inclusión, atendiendo por lo menos a las siguientes consideraciones:
1. **En el Presente Proceso Electoral Local.**

**EL CONSEJO GENERAL DEL IEE:**

El CG, en uso de sus facultades reglamentarias, deberá emitir en un plazo de **10 días hábiles considerando que todos los días y horas son hábiles[[33]](#footnote-33)** un lineamiento en el que **de manera fundada y motivada,** emita en su justa dimensión una **acción afirmativa en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad,** en el que, y valorando la etapa actual del proceso electoral y los derechos de todos los involucrados, tomando en consideración lo que se analiza en esta sentencia, estimando por lo menos los siguientes tópicos:

* 1. El CG, *con independencia de que los partidos tengan o no, registro estadístico de los aspirantes como parte de grupos vulnerables,* deberá incluir en los formatos empleados para los registros de candidaturas, *en cuanto a los datos de identificación de la ciudadanía****, en lo que respecta a su identificación sexo genérica***, TRES casilleros uno para “hombres”, otro para “mujeres” y uno que corresponda al “no binario”. (estas últimas, en el entendido que son parte de grupos vulnerables).
	2. Además, en los mismos formatos, deberá habilitar un apartado para que los aspirantes, *que así lo decidan*, señalen la pertenencia a uno o más grupos en situación de vulnerabilidad.
	3. Deberá emitir unos lineamientos donde se reglamenten buenas prácticas que permitan proporcionar atención especial y preferente a aquellas personas que por consecuencia de su discapacidad necesiten y soliciten un acompañamiento efectivo a efecto de facilitar el registro y remover obstáculos que pudieran entorpecer el procedimiento.
	4. Las personas con discapacidad que presenten su registro como candidatos, deberán exhibir el documento que avale su discapacidad, emitido por médicos certificados o autoridades legalmente facultadas para ello atendiendo a las medidas sanitarias de la autoridad que lo expida. Aunque se trata de un trámite estrictamente personal, cuando así se lo solicite el interesado, el IEE deberá coadyuvar para que obtenga la constancia respectiva, brindándole las herramientas necesarias u otorgándole la prórroga necesaria a los plazos establecidos en la convocatoria, para su obtención.
	5. En el caso de personas integrantes de la comunidad LGBTIQ+, que se auto adscriban con cualquiera identidad de género distinta a la plasmada en su documento de identificación, bastará con la sola manifestación, *bajo protesta de decir verdad*, sin que se le condicione a documentación comprobatoria.
	6. En cuanto a las asignaciones de candidaturas por representación proporcional, cuya identidad sexo-genérica se clasifique como no binario, deberá realizarlas estableciendo el porcentaje que garantice la no afectación al principio de paridad, al momento de la conformación del Congreso y de la integración de los Gobiernos Municipales. Por ejemplo; si un partido político postula nueve candidaturas de las cuales una corresponderá a una persona no binaria, la paridad se ajustará a las ocho candidaturas restantes, es decir, por lo menos cuatro asignaciones para mujeres y el resto para hombres.
	7. De resultar menester realizar ajustes en las listas de representación proporcional, en atención a lo ordenado por el artículo 143 A, fracción II, inciso b) del Código Electoral, para alcanzar la integración paritaria del Congreso del Estado, no se aplicará la regla relativa a la modificación de la prelación de la lista de representación proporcional de los partidos políticos, cuando se trate de personas pertenecientes a un grupo vulnerable, por lo que el CG saltará al siguiente aspirante de igual género a efecto de realizar los ajustes para lograr la paridad.
	8. Que publicite de manera basta, en los medios necesarios, a efecto de dar a conocer los lineamientos que emita por virtud de este fallo.
	9. Una vez emitidos los lineamientos relativos a las acciones afirmativas, el CG deberá dar aviso de manera inmediata al correo electrónico cumplimientos@teeags.mx, y, dentro de las 24 horas siguientes a su aprobación, remitirá en físico al domicilio de este Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, sito en Calle Juan de Montoro número 407, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., C.P. 20000.

**Partidos Políticos y Candidaturas Independientes**

* 1. En cuanto a los **Partidos Políticos,** se les conmina para que en la medida de lo posible y atendiendo a las etapas de sus procesos internos, **impulsar y promover** la participación de personas de grupos en situación de vulnerabilidad.
	2. Se exhorta a los Partidos Políticos a generar estadística, -en virtud de que la manifestación de pertenencia a un grupo vulnerable es a iniciativa del peticionario o del interesado- *con autorización del o la ciudadana,* a efecto de contar con datos que permitan medir su participación.
	3. En cuanto a los Candidatos Independientes, en la conformación de su planilla para contender en la elección de Presidencias Municipales, **impulsar, promover y velar¸** respecto a la inclusión de personas de grupos en situación de vulnerabilidad.
1. **Para los próximos procesos electorales.**
2. **En cuanto al Congreso del Estado.** Se vincula al Congreso Local para que, *en el ámbito de sus facultades, y en atención a la situación social actual del Estado,* **diseñen la o las acciones afirmativas en favor de grupos en situación de vulnerabilidad que consideren necesarias en la medida e intensidad que consideren atendiendo a su Soberanía***,-pudiendo generar cuotas tanto en el principio de mayoría relativa como proporcional****-*** que faciliten su inclusión en la representación pública bajo los principios de igualdad y no discriminación.

Por tal motivo, se exhorta al Congreso del Estado de Aguascalientes para que, en uso de sus atribuciones, emita las reformas a efecto de incluir en la Constitución Local, Código Electoral y las leyes que considere necesarias para que toda la ciudadanía incluidas las representadas por las promoventes, puedan tener igual o mayor oportunidad que el resto, esto con miras a los próximos procesos electorales locales.

1. **A los Partidos Políticos.** Finalmente, a partir del reconocimiento del mandato constitucional de igualdad y no discriminación, en el ámbito de sus competencias, se exhorta a los partidos políticos al cumplimiento de la postulación inclusiva en candidaturas, de acuerdo con las reformas que realice el órgano legislativo en cumplimiento de esta sentencia.
2. **En cuanto al CG.** Tomando como base las acciones afirmativas y las normas que implemente el Congreso Local, **y aun en su defecto**, en apego a los fundamentos Constitucionales que han sido referidos, el CG, deberá de llevar a cabo comicios en condiciones de igualdad, emitiendo tantos lineamientos como sean necesarios a efecto de tener una democracia inclusiva y bajo el principio de igualdad y no discriminación, por tanto, todos su actos deben ser tendentes a garantizar el derecho a ser votado en condiciones de igualdad, según lo previsto en el artículo 35, Constitucional.

**Además, se conmina al CG, a evitar recaer en omisiones del ejercicio de sus facultades reglamentarias, máxime cuando existe la obligación constitucional de promover, garantizar y actuar bajo los principios pro persona, igualdad y no discriminación.**

1. **RESOLUTIVOS.**

**PRIMERO**. Se acumulan los medios de impugnación.

**SEGUNDO**. Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral, emita Acciones Afirmativas en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad en atención a lo razonado por esta sentencia y para los efectos precisados en su parte final.

**TERCERO**. Se da vista al H. Congreso del Estado de Aguascalientes, y a los partidos políticos, según lo expuesto en el último apartado de la presente ejecutoria.

**NOTIFÍQUESE.** Como en derecho proceda y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, por unanimidad de votos de las Magistradas y Magistrado que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

|  |
| --- |
| **MAGISTRADA PRESIDENTA****CLAUDIA ELOISA DÍAZ DE LEÓN GONZÁLEZ** |
| **MAGISTRADA****LAURA HORTENSIA****LLAMAS HERNÁNDEZ** | **MAGISTRADO****HÉCTOR SALVADOR****HERNÁNDEZ GALLEGOS** |
| **SECRETARIO DE ACUERDOS****JESÚS OCIEL BAENA SUCEDO** |

1. Jurisprudencia 2/2004. De Rubro ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES. Disponible para consulta en la URL: [https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/Tribunal-electoral/jurisprudencia-2-2004/](https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-2-2004/) [↑](#footnote-ref-1)
2. Consultable en el Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página: 2136. [↑](#footnote-ref-2)
3. En la página 25, de la publicación titulada “Grupos en situación de vulnerabilidad” de Diana Lara Espinoza, que podemos encontrar en esta liga: http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas\_CTDH\_GruposVulnerabilidad1aReimpr.pdf [↑](#footnote-ref-3)
4. Jurisprudencia 9/2015. Rubro: *“****INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES PERTENECEN AL GRUPO EN DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL SE ESTABLECEN”*.** [↑](#footnote-ref-4)
5. Jurisprudencia 2a./J. 58/2010. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Consultable en la URL: <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=164618&Semanario=0> [↑](#footnote-ref-5)
6. Visible a fojas 117 a 118, del Volumen 1, de la citada Compilación de Jurisprudencia y Tesis en la Materia. [↑](#footnote-ref-6)
7. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 1299. [↑](#footnote-ref-7)
8. jurisprudencia 4/2000, cuyo rubro es: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN", disponible para consulta en <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=AGRAVIOS,,SU,EXAMEN,EN,CONJUNTO,O,SEPARADO,,NO,CAUSA,LESI%c3%93N> [↑](#footnote-ref-8)
9. Tesis: I.3o.C.109 K, **DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA DESENTRAÑAR LA CAUSA DE PEDIR.** Disponible para consulta en la URL: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/162385> [↑](#footnote-ref-9)
10. TEEA-JDC-018/2020. “*el establecimiento de una cuota del* ***10% de la totalidad de los cargos (propietarios y suplentes) para los consejos municipales y del 10% de la totalidad de los cargos que designará para los consejos distritales, en el entendido de que los consejos (municipales y distritales) se conforman tanto por personas que fungirán en las consejerías como en las secretarías técnicas, y que en estos cargos serán nombradas personas*** *en situación de vulnerabilidad, en el entendido que en ningún caso más del 50% de las personas designadas para esta cuota, serán suplentes”.* [↑](#footnote-ref-10)
11. SUP-JDC-304/2018 y Acumulados [↑](#footnote-ref-11)
12. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil; Caso Norín Catrimán y otros; caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos [↑](#footnote-ref-12)
13. ***Artículo 1°.*** *[…]*

*Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.* [↑](#footnote-ref-13)
14. ***Artículo 1.-*** *Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.*

***Artículo 2.-*** *Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.*

***Artículo 4.-*** *Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas (Párrafo reformado DOF 12-06-2013).*

***Artículo 5.-*** *No se considerarán conductas discriminatorias las siguientes:*

*I. Las acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias que sin afectar derechos de terceros establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades;*

 *[…]* [↑](#footnote-ref-14)
15. P./J. 79/2009, con el rubro "FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES". [↑](#footnote-ref-15)
16. SUP-RAP-121/2020 Consultable en la URL: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/RAP/121/SUP\_2020\_RAP\_121-945532.pdf [↑](#footnote-ref-16)
17. Disponible para consulta en fojas 46 a 49 del expediente TEEA-JDC-007/2021. [↑](#footnote-ref-17)
18. Expediente TEEA-JDC-018/2020 [↑](#footnote-ref-18)
19. Llamada sistémica por la Observación General 20 del Comité de Derechos Humanos. [↑](#footnote-ref-19)
20. Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras vs. México. Campo Algodonero. [↑](#footnote-ref-20)
21. tesis CCCXV/2015 de la Primera Sala de la SCJN, de rubro: *“****CATEGORÍAS SOSPECHOSAS. LA INCLUSIÓN DE NUEVAS FORMAS DE ÉSTAS EN LAS CONSTITUCIONES Y EN LA JURISPRUDENCIA ATIENDE AL CARÁCTER EVOLUTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”,*** consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, página 1645. [↑](#footnote-ref-21)
22. DE LA TORRE MARTÍNEZ, Carlos. *El derecho a la No Discriminación en México*, México, Porrúa-CNDH, 2005. [↑](#footnote-ref-22)
23. SG-JDC-2/2021 [↑](#footnote-ref-23)
24. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r35050.pdf [↑](#footnote-ref-24)
25. Disponible para consulta en la URL: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JDC-0349-2020.pdf [↑](#footnote-ref-25)
26. Datos obtenidos de la Agenda Electoral, la cual se puede consultar en el siguiente sitio web: http://www.ieeags.org.mx/banners/2020/AGENDA%20APROBADA%20%20A%20PUBLICAR.pdf [↑](#footnote-ref-26)
27. Diligencia para mejor proveer, disponible para consulta en la foja 53 del expediente TEEA-JDC-007/2021. [↑](#footnote-ref-27)
28. SUP-CDC-10/2017 [↑](#footnote-ref-28)
29. Datos obtenidos de los Documentos Básicos de los Partidos Políticos. ULR: https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/documentos-basicos/ [↑](#footnote-ref-29)
30. Acuerdo INE/CG18/2021, disponible para consulta en la URL: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116389/CGex202101-15-ap-12.pdf?sequence=1&isAllowed=y [↑](#footnote-ref-30)
31. LFPDPPP. Artículo 3°, fracción VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. Disponible para consulta en la URL: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf> [↑](#footnote-ref-31)
32. Ley Orgánica del Congreso del Estado de Aguascalientes. [↑](#footnote-ref-32)
33. Artículo 300, párrafo primero del Código Electoral. [↑](#footnote-ref-33)